

# Democracia y crisis en América Central: el caso de Costa Rica\*

Olivier Dabène

*Universidad de Niza (Francia)*

---

La América Central de los años '90 es más homogénea de lo que jamás lo ha sido en el curso de su historia. Todos sus países están hoy en día democratizados y hacen frente a las mismas dificultades económicas y sociales. Esta homogeneidad ha hecho posible la creación de un sistema de integración centroamericana (SICA), en el que se encuentran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Al mismo tiempo, la integración fortalece la convergencia de las economías y las políticas puestas en marcha, y de esta manera progresa la interdependencia en la región.

A la vista de la historia, esta situación es del todo excepcional. De hecho, desde las independencias obtenidas en 1821, Costa Rica ya constituía una excepción a la regla de inestabilidad política y del autoritarismo que prevalecía por todos lados. La esencia democrática de su régimen político ha sido, sin duda, exagerada; pero eso no quiere decir que ese país no haya sido por mucho tiempo una "isla", una "Suiza" en América Central.

Este trabajo se esfuerza en explorar, primero, algunas variables que puedan explicar este carácter excepcional. Analiza luego la crisis de los años '80, que contribuyó a hacer desaparecer esa excepcionalidad. Finalmente, concluye con un rápido balance de la situación, y sugiere que, en cuestión de regímenes políticos, América Central se ha aproximado a Costa Rica tanto como ésta lo ha hecho a sus vecinos.

---

\* El presente trabajo retoma análisis ofrecidos especialmente en la obra *Costa Rica: juicio a la democracia* (San José, Flacso, Cemca, 1992), y en otras publicaciones: *The Political Formula of Costa Rica* (Texas, paper on Latin America, University of Texas, Austin, 1988); "La stabilité politique en Amérique Latine: le Costa Rica", en *Annales des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes*, nro. 8, 1989; "Invention et rémanence d'une crise. Leçons d'Amérique Centrale", en *Revue française de science politique*, 42 (4), Agosto, 1992.

Traducción de Claudia Jiménez González; revisión de Antonio Hermosa Andújar.

## ¿Cómo explicar la excepcionalidad costarricense?

Costa Rica, el país más democrático de América Latina<sup>1</sup>, no puede ser abordado en términos de éxito democrático. Los intentos que en este sentido se efectuaron han hecho progresar muy poco la explicación de la originalidad del país, y con frecuencia han resultado casi tautológicos: Costa Rica es un país democrático porque reúne cierto número de criterios que de suyo definen la democracia (débiles diferencias sociales, cultura consensual, elecciones libres, etc.). Ahora bien, la lúcida observación de Costa Rica en los años '80 pone en evidencia la manera en la que un país debe saber, llegado el momento, sacrificar un poco de democracia para preservar su estabilidad, salvando las apariencias con el fin de preservar el escaparate que genera su éxito. Existe, pues, una lógica de estabilidad que es menester poner de relieve. La estabilidad democrática de Costa Rica parece ser deudora tanto de una sociedad civil poco conflictiva como de un Estado instrumento de una dominación eficaz. De un lado, la creciente rigidez de la distribución social parece aún hoy compensada por una cultura política de estabilidad. Del otro, la insistencia puesta sobre la dominación simbólica engendró una democracia performativa, en la que los mecanismos de movilización organizada reactivan el consenso sobre la legitimidad del régimen. Esos dos ángulos del análisis, políticos por arriba y por abajo, serán abordados a continuación.

### *Una cultura política de estabilidad*

Esta cultura política de estabilidad, de la que evocaré las características más sobresalientes, impregna las formas de movilización, los mecanismos de mediación y las instituciones. Y se halla asimismo arropada por la identidad de los detentadores del poder.

Sin caer en un determinismo reduccionista, según el cual la pobreza y el aislamiento de los primeros colonos habrían engendrado un Estado de espíritu libertario, individualista y democrático, no es menos cierto que la cultura política costarricense es más una cultura de compromiso que una cultura de enfrentamiento. Aún hoy, esta cultura es el resultado de un cierto estilo de relaciones sociales tempranamente establecidas, en función de las características de la estructura social del país heredadas del período colonial, y conforma las conductas políticas de los actores.

---

1. Según los criterios empleados en los años '70 por politólogos norteamericanos como Fitzgibbon, 1968 y Johnson, K. F., 1976.

Costa Rica heredó de la historia una estructura social relativamente equilibrada. Su situación geográfica “entre continentes y entre océanos” no la predeterminaba a contar con un poblamiento indio de importancia; sin embargo, el relieve accidentado encerró de todos modos a los primeros colonos en las tierras del valle central, donde sobrevivieron en la miseria durante cerca de tres siglos. Contrariamente a la mayoría de los demás países de América Central, la independencia, adquirida sin violencia a través de un decreto enviado por Guatemala en 1821, no provocó ningún reordenamiento social<sup>2</sup>. El restablecimiento de la economía del café en los años de 1830 provocó, en cambio, una verdadera revolución social. A las desigualdades del orden simbólico, que existían durante la colonia entre algunas familias aristócratas y el resto de la población, se añaden, en lo sucesivo, las diferencias económicas. Asistimos a la aparición de una nueva clase social de cafetaleros que se enriquecen rápidamente. Sin embargo, la economía de café se adapta muy bien a las plantaciones de mediana extensión, y no se desencadena ningún proceso de empobrecimiento de las masas campesinas. Todo lo contrario, el nuevo estilo en las relaciones sociales entre el patrón y sus peones es el característico de una relación clientelar. La solidaridad entre el patrón –que necesita de mano de obra y de reservas en garantía para sus acreedores ingleses– y el peón –que aprovecha los elevados salarios que ofrece el patrón, conservando su pequeña parcela (Vega Carballo, 1982)<sup>3</sup>– es necesaria. Otra etapa importante de la estructuración histórica de la sociedad costarricense, la revolución de 1948, provocó una reorientación radical de las estrategias de desarrollo, que tuvo por consecuencia la inflación de las capas medias<sup>4</sup> en un período en el que el agotamiento de la frontera agrícola cerraba un canal de ascenso social.

Fruto de esta evolución social, la cultura política de los costarricenses desactiva toda toma de conciencia de intereses de clase. Desde la época colonial –en la que el funcionamiento de redes de ayuda mutua condicionaba la supervivencia–, y la edad de oro del café –segunda mitad del siglo XIX–, en la que se multiplicaron las redes clientelares, los costarricenses tienden a la búsqueda del compromiso antes que al enfrentamiento. La mentalidad del campesino del siglo pasado está todavía muy presente en los costarricenses<sup>5</sup>. Cuando en los años ‘50

---

2. En tanto, fuera de América Central, por todas partes la independencia “libera fuerzas centrífugas, hace estallar las estructuras políticas, resquebraja las jerarquías sociales” (Rouquié, 1982: 67).

3. Los altos salarios se explican por una carencia de mano de obra en este país de 50.000 habitantes en el momento de la independencia.

4. La parte de la población activa ocupada en el sector público ha pasado del 6 % en 1950 al 18 % en 1980.

5. Los costarricenses califican de “conchos” o de “polos” a quienes, de entre ellos, poseen

la oligarquía paternalista de los cafetaleros cede su lugar al Estado-providencia, el clientelismo como tal pervivió. El partido de Liberación Nacional (PLN), que domina la vida política del país desde 1957, toma el lugar del patrón tradicional en su papel de mediador y modela un clientelismo de Estado.

Muchos rasgos culturales participan de esta cultura del compromiso. Así, los costarricenses prefieren más bien la burla o el “choteo”<sup>6</sup> a las reprobaciones violentas. La manera que tienen de tomar las decisiones, o mejor dicho, de evitar una decisión que pueda ser perjudicial para una de las partes concernientes, es también típico de una cultura del compromiso (“palanganeo”)<sup>7</sup>. Pero el componente más interesante de esta cultura política es precisamente el profundo apego de los costarricenses a la democracia. Sin embargo, no se la podría imaginar como una sociedad virtuosa e impregnada de los valores democráticos. Aun cuando la apertura democrática fue precoz<sup>8</sup>, todo el siglo XIX está marcado por la inestabilidad y un relativo autoritarismo. Su fe en la democracia manifiesta, más bien, un sostén difuso al régimen político que desde 1948 les asegura paz y prosperidad. En el momento en que la crisis económica pone en cuestión treinta años de progreso social, el tema del anticomunismo entra con fuerza dentro de la cultura política costarricense, aunque sin la intolerancia característica de otras latitudes.

Sea lo que fuere, si bien es cierto que esta cultura política propicia la fluidez de las relaciones sociales, no obstante desde hace algunos años los hábitos culturales propios de las diferentes capas sociales se afirman cada vez más como

---

aún rasgos de campesino. Notemos que se trata de un modo de ser y de pensar que nada tiene que ver con la posición social del afectado. José Figueres, el carismático líder que dominó la vida política del país durante una treintena de años desde 1948, sabía perfectamente hacer valer sus rasgos de *concho* cuando la ocasión lo merecía (en campaña electoral, por ejemplo). Fujimori, en el Perú, nos proporciona otro ejemplo.

6. Encontramos en Costa Rica formas de burla que vemos en Africa, sobre todo las alusiones al sexo. Cf. Toulabor, 1981. Así, durante la campaña electoral de 1985, los partidarios del candidato Calderón ponían en guardia contra una enfermedad muy extendida: el SIDA (*Soy Incondicional De Arias*). (Arias fue presidente desde 1986 hasta 1990, y fue sucedido por Calderón, quien gobernó de 1990 a 1994).

7. Ese proceso de negociación permanente repercute en gran medida sobre la vida política. No se acabaría nunca de citar los ejemplos de bloqueo a este respecto. En el dominio de la política exterior, la “neutralidad” de la administración Monge (1982-1986) y el Plan de Paz de Arias (1987) son ejemplo de ello.

8. En 1844, las diversas limitaciones puestas al ejercicio del derecho de voto dejaban fuera al 98 % de la población. En 1917, la proporción había descendido al 83 %. Por otro lado, en 1913 se adopta el sufragio directo, y en 1928 el voto secreto. Con todo, es en 1948 cuando se adopta el sufragio universal tanto para los hombres como para las mujeres. En 1959, el voto pasa a ser “una función cívica primordial y obligatoria” y, en 1971, la edad de la mayoría se rebaja a los 18 años. En la actualidad, las tasas de participación electoral rondan el 80 %.



verdaderas conciencias de clase. Los trabajadores en situación precaria, los obreros de los palmerales, los asalariados de los sectores medios (profesores, empleados de banco, funcionarios de instituciones autónomas, etc.) desarrollan reflejos corporativos que atestiguan la toma de conciencia de intereses comunes. La homogeneidad de la sociedad costarricense de los años '70 ha cedido su lugar a una segmentación del tejido social.

Sin duda, en razón de estas modestas tendencias al enfrentamiento político, los costarricenses no han conocido movilizaciones históricas espectaculares. La historia oficial sólo guarda tres fechas:

- \* En 1856 el pueblo debió movilizarse contra el invasor norteamericano William Walker. Esto costó la vida al 10 % de la población y engendró el nacimiento de una conciencia nacional, al romper las lealtades periféricas que prevalecían hasta entonces.
- \* En 1889 el pueblo se sublevó contra los fraudes electorales y, forzando al presidente que salía a respetar el veredicto de las urnas, firmó el acta de nacimiento de la democracia costarricense<sup>9</sup>.
- \* Finalmente, en 1948, una guerra civil puso fin a la corrupción del "régimen de los ocho años"<sup>10</sup>.

La historia del movimiento obrero es también pobre en fechas importantes. Se tienen en cuenta generalmente dos: el año 1920, en el que una huelga general dentro de los talleres arrancó la jornada de ocho horas, y el año 1934, en el que otra gran huelga en el sector bananero catapultó al partido comunista<sup>11</sup>.

Hoy, cada grupo social se caracteriza por una forma de movilización espontánea específica. El envío de una "petición" al presidente de la República, ampliamente publicitada en los periódicos, se ha constituido en arma favorita de los sectores empresariales. El bloqueo de las carreteras constituye otra forma de movilización utilizada por los productores de cereales (desconformes con los precios que les ofrece el gobierno) y por municipios enteros que se aíslan para exigir trabajos de infraestructura<sup>12</sup>. Las huelgas y manifestaciones son relativamente numerosas, pero poco eficaces. En virtud de una legislación desfavorable al dere-

---

9. Así, en 1989 Costa Rica pudo celebrar el centenario de la democracia.

10. El "régimen de los ocho años" fue fundado por el líder populista Calderón en 1940. De inspiración social-cristiana, debió aliarse con el partido comunista y la Iglesia Católica para sobrevivir a la oposición de la burguesía cafetalera y de las capas medias.

11. Más recientemente, en 1984 tuvo lugar la más larga y costosa huelga bananera de la historia. Las consecuencias, tanto para el movimiento sindicalista como para el conjunto de la izquierda, fueron desastrosas. En el último punto volveremos a hablar de la crisis del verano de 1984.

cho de huelga, cerca del 70 % de los paros son declarados ilegales<sup>13</sup>. Por último, los movimientos de los precarios, tanto rurales como urbanos, se multiplican en el país desde fines de los años '70.

La participación legal, en forma de voto o de adhesión a una organización sindical, deja una impresión ambigua. Las altas tasas de participación electoral indican ciertamente "una manifestación de comunión" al régimen, pero al mismo tiempo no cabe duda de que se trata también de un voto clientelar que socava la lealtad cívica. Los índices de sindicalización progresaron mucho hasta los años '80<sup>14</sup>, pero esta evolución no debe ocultar el declive del sindicalismo en provecho de otra forma de organización: el solidarismo<sup>15</sup>.

Los mecanismos de mediación de Costa Rica conceden una considerable atención a las demandas procedentes de las capas medias, por la mediación de los poderosos sindicatos del sector público<sup>16</sup>, así como a las del sector patronal, que disponen de una multitud de organizaciones<sup>17</sup>. En tanto esos sectores están casi

---

12. En este último caso, las demandas raramente se cumplen. Así, Cartago, la segunda ciudad del país, y antigua capital colonial, se aísla regularmente de la capital para reclamar una autopista, y ello luego de numerosos años...

13. El artículo 61 de la Constitución de 1949 reconoce el derecho de huelga, pero prohíbe su ejercicio en los servicios públicos, y remite a la ley para la definición de servicio público. Ahora bien, el artículo 369 del Código de Trabajo extiende la noción de servicio público a las empresas agrícolas, industriales, ganaderas, de explotación de bosques, de transportes ferroviarios, marítimos y aéreos, de servicios de transporte, carga y almacenamiento, así como a "todas las actividades cuya suspensión cause daños a la economía pública". Por otro lado, ese mismo Código sólo califica de legal una huelga si ha sido decretada por, al menos, el 60 % de los trabajadores de la empresa afectada, y si el Ministerio ha recibido el aviso con una semana de antelación. Además, los artículos 333 y 334 del Código Penal prevén penas muy severas para toda persona que incitare "al abandono colectivo del trabajo de los funcionarios o empleados de un servicio público". En fin, no existe protección legal alguna de los sindicalistas (*fueros sindicales*).

14. En 1963, la tasa de sindicalización era del 2,3 %. Esta tasa pasó al 10,9 % en 1973, y al 15,7 % en 1984. Tal progresión se explica por la evolución de la estructura ocupacional (en tres modos en el sector público). En 1984, la tasa de sindicalización era del 53,7 % en el sector público, frente al 7,3 % del sector privado.

15. Aparecida en 1948 como una "respuesta al peligro comunista", la doctrina solidarista pone el acento sobre la armonía social y sobre la complementariedad entre el obrero y su patrono. Al crear "organizaciones solidaristas" en las unidades de trabajo, que gestionan centros de ocio, acuerdan créditos, etc., el solidarismo recuerda a los sindicatos-mutualidades aparecidos en Argentina o México en los años '30. El reciente éxito del movimiento solidarista es una manifestación de la deriva conservadora en Costa Rica durante los años '80.

16. Así, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) reivindica 26.000 afiliados, es decir, el 85 % de los docentes del país, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), unos 11.000.

17. Entre las más poderosas caben citarse las siguientes: la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), la Asociación Costarricense de Gerentes y Empresarios

asociados al ejercicio del poder<sup>18</sup>, las demandas populares –tierras y vivienda– son ignoradas fuera de las campañas electorales. Estos sectores olvidados pueden, con todo, beneficiarse de una inmensa red de mediación informal (padres, amigos, familia, vecinos), que conforman una suerte de partido político invisible gracias al cual numerosas demandas son satisfechas. Dado que en este pequeño país de menos de tres millones de habitantes, el banquero o el abogado puede ser amigo del limpiabotas, con el cual bromea todos los días, los costarricenses tienden siempre a buscar una solución individual a sus problemas, y cultivan sus relaciones.

La organización partidaria se caracteriza por una bipolarización desequilibrada. Desde 1948, la vida política gira alrededor del PLN (dos presidentes PLN alternaron comúnmente con un presidente anti-PLN), lo que fuerza a los demás partidos a definirse en relación a aquél. La oposición de derechas está en perpetua búsqueda de identidad, mientras que la de izquierdas se encuentra débil y dividida. Esta situación se explica por el pragmatismo del PLN y por su capacidad para recuperar las orientaciones ideológicas de sus adversarios, a los que podrían, en un momento histórico dado, atraer al electorado (reformista hasta el fin de los años '70, anti-estadista hoy en día). De esta manera, la oposición pierde el consenso que gana<sup>19</sup>. No obstante, si pudo decirse que el PLN fue el partido de las clases medias, al confundir a los iniciadores de un proyecto de desarrollo con sus eventuales beneficiarios, sería más justo decir hoy que el PLN es un partido de gobierno al servicio de la estabilidad del régimen, a semejanza del PRI mexicano.

Entre este sistema de partido relativamente alejado del pueblo y la progresiva sustitución de los sindicatos por las asociaciones solidaristas<sup>20</sup>, presenciamos una degeneración de los procesos de mediación. Los progresos de la ideología solidarista, basados en la armonía social, dejan al trabajador solo frente a su

---

(ACOGES), la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), el Instituto Costarricense del Sector Empresarial (INCOSEM), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCECAEP), y las diferentes Cámaras de comercio e industria.

18. El CINDE, la más influyente organización patronal actual, fue creada en 1982 gracias a una donación de la US-AID para promover el desarrollo del país. Tras un año de funcionamiento, los directores de los programas ya se habían reunido cuatro veces con el Presidente, e innumerables veces con sus colaboradores y ministros.

19. En el origen de esta situación se encuentra la actitud de Figueres durante la guerra de 1948. Figueres se apoyó en los sectores burgueses para vencer a Calderón, pero debió negociar la paz con el partido comunista a cambio de la preservación de las reformas sociales de Calderón. Después de la guerra, Figueres había neutralizado así toda oposición: la de derecha no podía reclamar la vuelta al régimen que había combatido, y la de izquierda era desbordada por el reformismo del nuevo régimen.

20. Entre 1979 y 1981, el número de sindicatos en el país bajó de 325 a 259, mientras que el de las asociaciones solidaristas aumentó de 98 a 216.

empleador y liberan a este último de toda organización politizada. Se da así un retorno a la situación del siglo pasado, cuando el peón, sólo frente a su patrón, dependía de él para su bienestar. Aun cuando el proceso de mediación funcionara de manera satisfactoria para las clases subalternas, sus reivindicaciones tendrían muchas dificultades para concretarse en políticas públicas en tanto el aparato institucional y burocrático permanezca inmovilizado. La cultura de estabilidad se manifiesta de manera caricaturesca en las instituciones políticas.

Las circunstancias históricas de la aparición del régimen de 1949 explican, en parte, esta situación de bloqueo. Figueres, el vencedor de la guerra civil de 1948, es derrotado en las elecciones por una asamblea constituyente en 1949. Además, los constituyentes heredan una tradición de excesivo presidencialismo y de corrupción del poder legislativo<sup>21</sup>. Es, pues, para ellos muy sentido el elaborar un sistema complejo de pesos y contrapesos que otorguen poderosas prerrogativas a los poderes de control, en tanto confieren a los diferentes centros del poder equitativas facultades de bloqueo. Las prerrogativas del presidente son, pues, relativamente débiles en el contexto latinoamericano, aunque sobre este punto sería menester precisar que el intervencionismo del PLN entre 1948 y 1978, así como la imponente figura de José Figueres (tres veces presidente durante el período), han oficiado de segunda constitución. En este contexto, el poder legislativo de 1949 previó numerosos centros de poder paralelo, sirviéndose ante todo de la autonomía de las colectividades territoriales y creando instituciones administrativas autónomas<sup>22</sup>.

---

21. Durante el siglo XIX, la Asamblea Legislativa fue la encargada de organizar las elecciones, lo que regularmente daba lugar a toda suerte de fraudes. Por otra parte, Costa Rica se caracteriza, como muchos otros países de América Latina, por una historia constitucional caótica. La última Constitución, anterior a la de 1949, permaneció sin embargo en vigor 78 años (de 1871 a 1949). Esa longevidad refleja una pérdida de importancia del debate constitucional en un momento en el que la economía del café rompe las lealtades periféricas, y en el que se establece un dominio paternalista de la oligarquía de plantadores.

22. Respecto del primer punto, la Constitución preveía un "régimen municipal" que fue completado en 1970 mediante un "Código Municipal" cuyo objetivo era el de estimular el desarrollo autónomo de las comunidades. La insuficiencia de los recursos propios, y sobre todo el choque entre las prerrogativas municipales y las de las instancias administrativas centrales volvieron sin embargo inoperante la autonomía de las municipalidades, aunque su papel no sea en absoluto descuidable. Respecto del segundo punto, la Constitución concedía a la Asamblea Legislativa la posibilidad de crear nuevas instituciones (llamadas "organismos descentralizados"). En 1978 había 182 instituciones, de las que 96 habían sido creadas después de 1956 y 76 después de 1960. Tales instituciones, al igual que el "estatuto del servicio civil" para los funcionarios, permitieron al PLN ampliar su clientela y distribuir los despojos del sistema.

En suma, debido al juego de las instituciones, de las alternancias políticas y del sistema de despojos, se desarrolla una situación de autorregulación recíproca al hallarse las diferentes fuerzas políticas una tras otra, y a veces simultáneamente, en posición de controlador y de controlado. Este empate institucional ofrece un cuadro ideal para la búsqueda de un compromiso que produzca un máximo de ganadores y un mínimo de perdedores. Una ilustración de este fenómeno es la total interpenetración entre las formas de concepción política, administrativa e industrial presentes en los círculos dirigentes<sup>23</sup>.

Existe en Costa Rica una clase dirigente homogénea<sup>24</sup> y perfectamente bien integrada<sup>25</sup>, que siempre ha sabido diversificar sus actividades, y que constituye una nebulosa en la que la intensidad y la frecuencia de las relaciones entre los miembros o los clanes más bien cimientan unidad que delatan competencia. Por lo demás, el anclaje político de esta clase dirigente ni siquiera es estable. Así, por ejemplo, Rodrigo Madrigal Nieto, presidente de la Cámara de Industria en 1959, en el momento de la adopción de la “Ley de protección y de desarrollo industrial” (¿próximo pues al PLN?), vinculado a todos los sectores activos (prensa, comercio, industria, finanzas y servicios), diputado y presidente de la Asamblea legislativa bajo el estandarte Coalición Unidad del Presidente Carazo (anti-PLN, 1978-1982), pudo ser después ministro de asuntos exteriores de Arias (PLN).

### *¿Una democracia performativa?*

La estabilidad democrática de Costa Rica no se debió solamente a tal cultura y a tales mecanismos de desarticulación de las demandas (explicación “desde abajo”), sino también a una legitimación muy eficaz del poder (explicación “desde arriba”). A menudo se califica a Francia como una “República del discurso”, y

23. Así, entre los miembros del primer gobierno de Arias en 1986, 1 de cada 10 era un industrial, 4 de cada 10 administradores, 1 de cada 4 abogado, y 1 de cada 3 profesor.

24. Stone (1982) ha mostrado que la mayor parte de los políticos importantes descendían de algunas grandes familias de la aristocracia colonial. Aún hoy la clase dirigente es más “blanca” que el resto de la población, y se caracteriza por hábitos culturales que generan distinciones.

25. En un estudio empírico realizado en 1986, mostré que los miembros de la clase dirigente pertenecían simultáneamente a varios sectores económicos, tanto como al mundo político, lo que impide hablar de una lucha entre fracciones de clase para ejercer una dominación hegemónica (estudio de la participación de los principales ganaderos en otras actividades económicas, perfiles de miembros del consejo de administración del CINDE, perfiles de los miembros del gobierno Arias, y de la presencia de accionistas del periódico *La Nación* en organizaciones patronales, en *Juicio a la democracia*, op. cit.).

desde François Furet sabemos el papel jugado por la Revolución Francesa en este proceso (Furet, 1978). Costa Rica también ha conocido un acontecimiento capital, y por razones similares. La guerra civil de 1948 es importante, más que por el nuevo orden sociopolítico puesto en su lugar, por la interpretación de la historia del país que éste originó. Pues lo que se juega en 1948 no es la victoria de los intereses de las clases medias (según una más que discutible racionalización retrospectiva), sino la elaboración de una nueva fórmula de legitimación del poder. Esta nueva fórmula política<sup>26</sup>, este “gran discurso” de la legitimación (Lyotard, 1979) fue retomado por el Partido de Liberación Nacional, constituido en 1951, que es desde entonces el gran actor de la vida política costarricense<sup>27</sup>.

Desde esta época, Costa Rica ha sido maestra en el arte de la propaganda política. Siempre se insiste demasiado en la importancia de la propaganda en los regímenes autoritarios (el anticomunismo en Paraguay y Chile, el antiyanquismo en Cuba), pero no lo bastante sobre este fenómeno en la democracia. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la propaganda es característica de los regímenes que buscan arraigo. En este sentido, la Francia de la tercera república nos proporciona un ilustrativo ejemplo. Esta propaganda no se manifiesta bajo el aspecto de un adoctrinamiento; toma más bien la forma de una construcción o de una reactivación permanente del consenso. El ejercicio de la democracia esta constantemente puesto en marcha en Costa Rica según un escenario que varía en el grado de la coyuntura.

La propaganda oficial saca provecho de múltiples apoyos<sup>28</sup>. Su principal figura es el presidente de la República. Figura venerada por todos, comprendida la oposición, ejerce una función de personalización de la democracia. Casi omnipresente en este país de reducidas dimensiones, gracias a sus frecuentes viajes por el interior y a sus numerosas alocuciones recogidas por los periódicos, la radio y la televisión, se mantiene de hecho en contacto directo y permanente con el

---

26. Según Mosca (1939: 70): “las clases dirigentes no justifican su poder por la simple posesión del poder, sino que tienden a encontrar una base moral y legal para dicho poder, presentándolo como una consecuencia lógica y necesaria de ciertas doctrinas y creencias que son reconocidas y aceptadas por todos [...]. Esta base legal y moral, sobre la que reposa el poder de la clase política, es lo que hemos llamado... una ‘fórmula política’ ”.

27. Bodenheimer (1970) califica este discurso legitimador de “conciencia falsificada” de la realidad nacional, que aspira a justificar la intervención violenta de 1948 y la dominación del PLN a partir de 1951.

28. Véase nuestro estudio acerca de las celebraciones oficiales importantes –sobre todo durante el “mes de los héroes” (abril), y el “mes de la patria” (septiembre)–, de los “actos cívicos” impuestos por el Ministerio de Educación en las escuelas, de los discursos pronunciados por el presidente Monge, y de la ideología difundida a través de los editoriales del periódico *La Nación* (en *Juicio a la democracia*).

pueblo. Además, con frecuencia se presenta acompañado del Arzobispo de San José y, durante los años '80, del embajador de Estados Unidos, completando la tríada "Democracia-Dios-Estados Unidos", que garantiza la prosperidad del país. Así, el orden sociopolítico, del cual Estados Unidos es garante, está sacralizado, y toda oposición resulta anatematizada. La democracia costarricense, producto de la historia y emanación de la idiosincrasia nacional, es un destino. Aquellos que la amenazan están condenados al fracaso, pero conviene estar alerta a fin de que su tentativa de desestabilización no produzca demasiados daños<sup>29</sup>.

Tras el presidente, el gobierno alimenta la propaganda oficial poniendo atención en envolver las políticas públicas con una amplia publicidad. No existe un "Ministerio de la Movilización y del Desarrollo de los Recursos Humanos" –como pudo existir en Jamaica con Manley en 1977 (Kaufman, 1985)–, encargado de la educación política, pero el "Ministerio del Gobierno y de la Policía" juega ese papel. De esta forma, a través de una Dirección Nacional del Desarrollo de las Comunidades (DINADECO), que supervisa una red de Asociaciones de Desarrollo distribuidas por todo el país, tal Ministerio puede ejercer eficazmente una función de socialización hasta el nivel local. Podríamos también tomar el ejemplo del Ministerio de Educación, que se ha llevado hasta un tercio del presupuesto de la nación<sup>30</sup>, y que impone cada año un programa obligatorio de actos cívicos muy numerosos. Aquí, todavía, el mensaje tiende a dar una visión finalista de la historia del país, a través de tres hazañas: la de 1856 (defensa de la soberanía nacional contra el filibustero Walker), la de 1889 (advenimiento oficial de la democracia) y la de 1948 (guerra civil para defender la democracia contra el "caldero-comunismo")<sup>31</sup>.

De común acuerdo con el Presidente y el gobierno, los numerosos grupos de presión que están casi asociados al ejercicio del poder, participan también de este amplio esfuerzo de propaganda. Las organizaciones patronales son particularmente activas en este terreno, por ejemplo financiando frecuentes campañas de información cívica en los medios de comunicación, y considerándose depositarias

---

29. Este aspecto revestía gran importancia en los años '80, pues la democracia estaba "amenazada" (véase el análisis de los discursos pronunciados por el presidente Monge entre junio y setiembre de 1985, en *Juicio a la democracia*). La dimensión religiosa es primordial. Durante el *Te Deum* de la independencia, el 15 de septiembre de 1985, el Presidente concluyó su discurso con un conmovedor: "Dios es Democracia".

30. Tal proporción ha disminuido dramáticamente en los últimos años, pasando del 37 % en 1970 al 22 % en 1982, y al 17 % en 1988.

31. 1987 se añadirá, ciertamente, a aquellas tres fechas importantes, como año en el que el resto del mundo ha reconocido finalmente el carácter excepcional de Costa Rica al atribuirse el Premio Nobel de la Paz a su presidente Arias.

de autoridad moral para intervenir en la vida política. Sin duda, el ejemplo más típico al respecto es el de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). En forma paralela a su papel económico, se dotó de manera explícita de un programa titulado "Motivación y comunicación", destinado a movilizar a la opinión pública sobre temas que mezclan siempre hábilmente referencias a la democracia y a las orientaciones económicas (del estilo "la empresa privada produce la libertad").

Fuera de los círculos dirigentes, las instancias de mediación (partidos políticos, sindicatos, organizaciones) poseen un papel preponderante en la movilización oficial. En circunstancias difíciles, como las de los años '80, los partidos defendían la democracia. Así, por ejemplo, con motivo de la campaña electoral de 1985, los partidos rivalizaban en eslóganes sobre el tema de la democracia, como si los candidatos en presencia debieran dar prueba de su dominio de ese gran discurso legitimador escrito por la generación de 1948. No había ni conflicto de legitimidad ni conflicto sobre las finalidades entre las dos formaciones políticas principales, y aun el partido comunista, que se quería el gran purificador de la democracia costarricense, no cuestionó los fundamentos del régimen. Por otra parte, la intensidad de la propaganda oficial (mensajes cívicos, actos cívicos) baja durante una campaña, lo que prueba que campaña y propaganda desempeñan la misma función. Los sindicatos, sobre todo en las plantaciones bananeras, se salen a veces del discurso oficial, y es eso, por otro lado, lo que explica su impopularidad. Pero en el sector público, donde los sindicatos están todavía muy presentes, se jactan aún de ser un componente elemental de la democracia. El hecho mayor de la Costa Rica contemporánea en este cuadro es ciertamente la explosión de las Asociaciones Solidaristas, que como dijimos tienden poco a poco a ocupar el lugar de los sindicatos. Aquí conviene señalar hasta qué punto la importancia del Movimiento Solidarista Costarricense, ayudado por la Iglesia Católica, refleja la preocupación por volver a las fuentes mismas del régimen democrático a través de un mensaje de armonía social.

Citemos aún la importancia de los medios de comunicación (radio, periódicos y televisión), que no se ven solamente como un vector de propaganda, sino como una fuente de movilización. Los suplementos de instrucción cívica son numerosos en los periódicos, lo mismo que los "mensajes cívicos" financiados por las cadenas de televisión o las estaciones de radio. Por otra parte, los diarios ofrecen regularmente carteles publicitarios (campos pagados) a los diversos grupos de presión que desean la divulgación de mensajes ideológicos.

El pueblo, finalmente, recibe esta propaganda con entusiasmo en la medida en que conforta sus inclinaciones ideológicas y alimenta su tradición cultural de búsqueda constante de compromiso. Pues lo que sorprende más en este esfuerzo de



movilización, es que no encuentra oposición. La idea según la cual el régimen democrático costarricense es el mejor de América Latina parece ser una idea unánime en el país, desde el campesino aislado en su montaña hasta el hombre político de la capital. Las manifestaciones de movilización cívica tienen siempre un éxito considerable, aunque sin violencia ni nacionalismo exacerbado, cosa necesaria de subrayar. En caso de necesidad, como en los años '80, se ve a todos los costarricenses participar en el "esfuerzo de guerra psicológica".

Propuse el término de "democracia performativa"<sup>32</sup> para designar esa manera propia de la democracia costarricense de no existir esencialmente más que a través de sus discursos. En efecto, si la estabilidad de un régimen depende de las amenazas que pesan sobre él y de su capacidad de respuesta a las mismas, no hay inestabilidad sin una perturbación que la provoque. Para que en un momento histórico dado un grupo social o un individuo tome la iniciativa de provocar esa perturbación, es necesario que tenga la certeza de que el régimen esté amenazado o sea amenazable. En un país como Costa Rica, donde la creencia en la estabilidad del país es objeto de amplio consenso, no existe actor susceptible de poner en peligro dicha estabilidad. Pero en el momento en que las amenazas exteriores estén efectivamente presentes, es menester que el país no padezca de exceso de confianza y sea víctima de lo que Merton llama la "predicción-suicida" (Merton, 1965). Y ésta es la razón por la cual el espectro de la desestabilización es agitado sin cesar, lo que permite cultivar la veneración para las instituciones, y como también dijo Merton, la "profecía se realiza por sí misma".

La excepcionalidad costarricense se explica a la vez, pues, por unos mecanismos de desarticulación de las demandas y por el preservado consenso que reina en el país. La estabilidad democrática se alimentaba de esta excepcionalidad. El consenso era constantemente mantenido por las imágenes negativas provenientes del resto de América Central. Ahora bien, en los años '80 Costa Rica hizo muchos esfuerzos por protegerse de los efectos de contagio de la crisis, pero sólo lo consiguió en parte. No tanto por razones objetivas. Incluso diría que, objetivamente, se benefició de la crisis, en la medida en que pudo vender su imagen de país democrático amenazado a la administración Reagan, y captar una ayuda económica importante que la ayudó a hacer frente a la crisis económica. Pero desde un punto de vista más subjetivo, un discurso hizo su aparición sobre la crisis regional que necesariamente incluyó a Costa Rica. En otros términos, la crisis centroamericana de los años '80 fue "inventada".

---

32. Los lingüistas hablan de verbos o de enunciados performativos. Así, "autorizar" es un verbo performativo porque "decirlo es hacerlo". (Cf. Austin, 1970 y Bourdieu, 1982).

## Crisis regional y fin de la excepcionalidad costarricense

No sabríamos medir hasta qué punto la crisis regional de los años '80 fue inventada sin traer a la mente el origen de los desajustes propios de cada país. Estos aparecieron desde el final de los años '60, de manera tal que la revolución sandinista de 1979 no constituyó para la región más que una "segunda caída", a semejanza del *double dip* del que hablan los economistas. No obstante, en la década del '80, la lectura que se impuso de los acontecimientos hizo del sandinismo el origen de los problemas, y de su erradicación el fin de la crisis.

### *Sobre el origen de las crisis: causas comunes y trayectorias particulares*

Los fermentos de la crisis, pues, fueron sembrados desde los años '60. Paradójicamente, el período fue más bien marcado por un fuerte crecimiento económico. Pero esto se hizo al abrigo de tarifas aduaneras particularmente elevadas, que protegían un desarrollo autocentrado de la región en el marco del Mercado Común Centroamericano (MCCA). El ambicioso proceso de sustitución de importaciones fue insignificante y la dependencia exterior aumentó.

Cuando menos, tal crecimiento económico permitió a los regímenes autoritarios adquirir una cierta estabilidad, pues la América Central de la posguerra escapó en gran parte a las presiones internacionales ejercidas en favor de la democracia (Lowenthal, 1991). El caudillismo, esta forma tradicional de dominación que durante mucho tiempo caracterizó la vida política de numerosos países latinoamericanos, entró por cierto en crisis, pero no desapareció. Los últimos caudillos fueron eliminados –en 1944, Jorge Ubico en Guatemala y Hernández Martínez en El Salvador, ambos en el poder desde 1931, y en 1949 Tiburcio Carías, presidente de Honduras, que gobernaba desde 1933–, pero el ejército como institución los sucedió en los años '60. Así, en El Salvador los militares organizaron, a partir de 1962, un régimen de partido único. En Nicaragua, la familia Somoza, que reinaba sola con el apoyo de una guardia pretoriana desde 1936, se mantuvo en el poder. En Guatemala, un golpe de Estado en 1963 puso fin a la inestabilidad que caracterizaba la vida política del país desde la caída del régimen "revolucionario" de 1944-1954. En Honduras, también en 1963, un golpe de Estado puso fin a un período de apertura democrática de seis años. Costa Rica, por último, marca la excepción. La democracia parece estar bien consolidada desde 1948, y la alternancia en el poder entre los dos partidos principales es una regla.

Ahora bien, se produjeron transformaciones tanto en las actividades agrícolas como en las industriales, que tuvieron por consecuencia la profundización de las diferencias sociales. La aceleración de las exportaciones de productos agrícolas tradicionales, estimulada por las altas cotizaciones alcanzadas en el mercado mundial, y la diversificación de nuevos productos, como la carne, provocaron un movimiento de concentración de tierras en los campos. De manera similar, el tejido de pequeñas industrias de tipo artesanal se vio aniquilado por un proceso de concentración industrial sin precedentes. Por último, la primera crisis del petróleo no fue ajena a América Central, que conoció en los años '70 una aceleración de la inflación, fenómeno casi desconocido hasta entonces. Amplios sectores sociales, tanto rurales como urbanos, se vieron de pronto empobrecidos (Bulmer-Thomas, 1987).

Los movimientos reivindicativos populares adquirieron nuevo vigor a causa de esta triple evolución, y ello se manifestó de diversas maneras (Camacho y Menjívar, 1985). El mundo rural, en primer lugar, fue el escenario de una creciente agitación que tomó la forma de invasiones de tierras. Fue sin duda en El Salvador –país en el que la densidad de la población es más fuerte–, donde el proceso de concentración de tierras tomó el sesgo más dramático. Así, la proporción de campesinos sin tierras pasó del 19,8 % en 1961 al 41,1 % en 1975. En ese año apareció en los campos el Bloque Popular Revolucionario (BPR), que tres años después se lanzó a la lucha armada. En otros países aparecieron también fuertes movimientos campesinos, particularmente en Honduras.

En segundo lugar, los movimientos sociales urbanos entraron en plena ebullición. En todos los países, el paisaje sindical se transformó y los movimientos reivindicativos se radicalizaron. En Nicaragua, junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fundado en 1962, que dirigía las acciones revolucionarias, el Movimiento Pueblo Unido (MPU), integrado por organizaciones muy diversas, fue el verdadero motor de la movilización social.

En tercer lugar, el factor religioso de esta movilización fue absolutamente determinante. El compromiso de la Iglesia Católica para con el pueblo, afirmado en la segunda conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín (1968), se concretó en América Central con la aparición de un movimiento religioso popular que tuvo importantes consecuencias políticas. En Guatemala, por ejemplo, este movimiento chocó en un primer momento con la oposición de la jerarquía eclesiástica, próxima a los militares en el poder. Pero el trabajo de reflexión efectuado por los curas en sus respectivas parroquias, y que ofrecía un canal de expresión a las poblaciones marginadas, particularmente a las indígenas, fue violentamente reprimido. La solidaridad de la Iglesia se vio reforzada, y su papel de opositor político al régimen, fortalecido.

No es necesario proseguir con esta descripción. Habrá quedado claro que el modelo de desarrollo que los países de América Central adoptaron conjuntamente al comienzo de los años '60 provocó disfuncionamientos a partir de la década siguiente. Los desajustes comunes que aparecieron engendraron movilizaciones multisectoriales en todos los países<sup>33</sup>.

A tales determinantes hay que añadir las historias particulares de cada país. En Costa Rica, el modelo de desarrollo impuesto por el Partido de Liberación Nacional, vencedor de la guerra civil de 1948, sufrió una neta reorientación a comienzos de los años '70. El Estado, promotor del desarrollo hasta entonces, se volvió el principal actor económico a través de la creación de una Corporación de desarrollo que muy rápidamente entró en competencia con el sector privado, y demostró ser una vorágine financiera. A comienzos de los años '80, el consenso y el clientelismo de Estado, que aseguraban la estabilidad política del país, eran de nuevo cuestionados.

En respuesta a la movilización multisectorial, Honduras conoció, en los inicios de la década del '70, una tentativa de democratización sobre la base de un acuerdo entre los dos partidos tradicionales, nacional y liberal. El fracaso de ese régimen de unión nacional permitió a los militares simbolizar por un tiempo un reformismo que, como en Costa Rica, se apoyó en la creación de una corporación de inversiones. Pero la oposición de los partidos políticos y de los empresarios forzó a los militares a organizar, antes de planificar un retorno a la democracia, un sistema de concertación que significaba el abandono de las reformas y el cierre del espacio de participación política.

En Nicaragua, el terremoto político de 1972 marcó una etapa esencial en la escalada de la movilización contra la dictadura de Somoza. La familia del dictador acaparó la ayuda internacional y, como en Costa Rica y Honduras, el poder vino a ejercer una competencia desleal al sector privado, que pasó a la oposición. Por otra parte, el Frente Sandinista de Liberación Nacional volvió a ejercer sus actividades, y la Iglesia Católica se mostró muy crítica frente al régimen. Cuando el FSLN hizo su entrada triunfal en Managua el 19 de julio de 1979, todo un sistema se vino abajo. La complicidad de los principales partidos políticos, las redes clientelares que hacían de la burguesía la niña mimada de la dinastía, la alianza privilegiada con Estados Unidos, todo fue de nuevo puesto en discusión. El conjunto de la sociedad nicaragüense acababa de expulsar a Somoza del poder, y era mucha su voluntad de hacer tabla rasa del pasado.

---

33. Esto no significa que se haya dado una causalidad lineal. Analizando las causas económicas de la crisis, Víctor Bulmer-Thomas (1992) estima que aquellas son factores explicativos necesarios pero no suficientes.

El Salvador fracasó en su intento de seguir el mismo camino que Nicaragua. Su evolución política, con todo, en nada era comparable. Después de tres tentativas fallidas de democratización (1931, 1948, 1960), el período que va de 1961 a 1979 fue el de un deslizamiento incontrolable hacia la guerra civil. Durante las elecciones de 1972 la oposición –unida tras la candidatura del demócrata-cristiano José Napoleón Duarte– obtuvo la victoria, pero ésta no le fue reconocida. El régimen salvadoreño se convirtió entonces en un “Estado de seguridad nacional”<sup>34</sup>, y numerosos salvadoreños se volvieron hacia la lucha armada. En 1979, cuidadosos de evitar un desenlace “a la nicaragüense”, Estados Unidos dio su apoyo a un golpe de Estado. La junta cívico-militar que se instaló en el poder dejó ver sus pretensiones resueltamente reformistas, pero las fuerzas de izquierda querían ir más rápido y más lejos, y la guerra civil se hizo inevitable.

Por último, Guatemala conoció entre 1944 y 1954 una experiencia de democracia reformista brutalmente interrumpida. Este episodio reveló los límites impuestos a la democratización en América Latina en los años ‘50. Significó también para Guatemala el retorno de los gobiernos ferozmente represivos. Por último, provocó una polarización duradera de la sociedad. Desde 1960, jóvenes oficiales opositores a la orientación anticomunista del gobierno trataban de tomar el poder; fracasaron, pero su lucha prosiguió por medio de organizaciones guerrilleras. En 1979, la guerrilla pareció en grado de derribar el régimen.

### **La difusión de la revolución sandinista y la invención de una crisis regional**

La situación en los cinco países de América Central era, pues, crítica en vísperas de la victoria de la revolución sandinista. Dicha situación era el fruto del desarrollo paralelo –desde los años ‘70, e incluso antes en lo que concierne a Guatemala– de cinco crisis separadas. El hecho de que pueda encontrarse un cierto número de causas comunes muy generales no anula semejante proposición. Así, se podrá invocar el cuestionamiento de un modelo de desarrollo económico, como también el de los tipos de regímenes a él asociados. Pero esta clase de explicación comodín se topa con escenarios de aplicación demasiado diversos, y eso le impide ser realmente operativa. Por lo demás, las modalidades de evolución de

---

34. Tipo de régimen que se apoya en la doctrina de la seguridad nacional, inventada por los militares argentinos en los años ‘60 y difundida por Estados Unidos, que asigna al ejército una función antisubversiva de control social con el fin de erradicar el comunismo.

tal o cual crisis no se dejan aprehender más que entrando en el detalle de la historia del país, que le sirve de soporte.

Puede apreciarse entonces, una vez consideradas sus características peculiares, cómo la totalidad de los regímenes políticos de América Central entraron en crisis en momentos particulares, y a consecuencia de acontecimientos singulares que fueron, por utilizar una terminología física, otras tantas perturbaciones desencadenantes:

#### ORIGEN DE LAS CRISIS NACIONALES

PAÍS	COMIENZO DE LA CRISIS	PERTURBACIÓN
Guatemala	1954	Golpe de Estado
Salvador	1972	Elección
Nicaragua	1972	Terremoto
Honduras	1972	Golpe de Estado
Costa Rica	1976	Divorcio empresarios/PLN

Cada una de estas crisis evolucionó de manera relativamente autónoma, sin conocer solución hasta 1979. La victoria de la revolución sandinista de ese año constituyó otra perturbación desencadenante, esta vez para toda la región. La naturaleza y el alcance de este cambio no son fáciles de apreciar, pues si bien produjo efectos en los demás países, no es menos cierto que se inscribe en una coyuntura mundial del todo particular.

Los últimos años de la década del '70 fueron, en efecto, testigos de una crisis económica y de una crisis internacional. La segunda crisis del petróleo (1979-1980) afectó duramente a América Central, así como al conjunto del Tercer Mundo, y provocó endeudamiento, hiperinflación y depresión. En el plano internacional, la victoria sandinista, que tuvo lugar unos meses después de la "caída" de la isla de Granada, consagró la pérdida de la influencia de Estados Unidos en el mundo entero, tras la debacle vietnamita. América Central volvió a ser una zona prioritaria que reconquistar, señuelo de una cruzada destinada a restablecer la superioridad norteamericana en el mundo.

Como puede verse, el cuadro anterior sobre los orígenes de las crisis en los diferentes países de la región se complica singularmente. En 1979 se suman ciertos factores regionales, y será menester tenerlos en cuenta en lo sucesivo:

gencia de efectuar profundas reformas. El orden político normal –objetivado– se vino abajo; estaba fundado en la homeóstasis, es decir, en el rechazo de toda reforma susceptible de cuestionar la dominación o los privilegios de las clases dominantes tradicionales. A esta primera conmoción se añade una segunda. Muy rápidamente, los sandinistas optaron por una terapia atípica en el contexto centroamericano. La vía revolucionaria, adoptada antes por Guatemala con el fracaso indicado, aportaba soluciones radicales a los problemas endémicos de la región –dependencia exterior, injusticias sociales, desigualdades en la distribución de las tierras, etc.– que no dejaron de impactar contra las élites tradicionales. Estas tenían un efecto de propagación de los temas revolucionarios que terminara alimentando una movilización social ya elevada.

Las clases dirigentes en los cuatro países de América Central, aparte de Nicaragua, parecieron, pues, imponer una especie de lectura de la crisis que los apartaba de toda atracción hacia el modelo sandinista. Ello se mostraba tanto más urgente, cuanto que estaban precisamente buscando una renovación de su discurso legitimador, pues el fundado sobre la experiencia de integración y el modelo de sustitución de importaciones ya no era creíble.

La concomitancia de varias crisis los ayudó en esta tarea de reobjetivación. El anticomunismo, sincero o importado de Estados Unidos, resultó de ayuda a un discurso que situaba en la revolución sandinista la raíz principal de los problemas económicos, sociales o políticos de cada país de la región. Además del hecho de que disfrazaba el origen interno de las dificultades con que se encontraron los regímenes, la oposición a la revolución de Managua se hizo extremadamente lucrativa, en la medida en que Estados Unidos estaba dispuesto a recompensarla sustancialmente. De manera que el referente de numerosas políticas públicas se impregnó de antisandinismo.

Este fue el caso de la política exterior, la cual, al considerarse que todos los problemas tenían un origen externo, ocupó de repente un lugar preponderante en las preocupaciones de los Estados. Por esta razón, las decisiones tomadas en materia de diplomacia en los diferentes países son testimonio de las nuevas orientaciones ideológicas. Asimismo, el trabajo realizado por los presidentes centroamericanos, reunidos regularmente en cumbres a partir de 1986, es realmente apasionante. La lectura de las declaraciones finales emitidas nos descubre la manera en la cual se construyó una representación de la crisis y se le inventaron soluciones.

¿Pero qué pasó exactamente? Antes de hablar del trabajo común de reobjetivación realizado por los presidentes centroamericanos, es menester traer al espíritu sus fuentes de inspiración. Cuando el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo convocó en 1986 la primera cumbre de presidentes en el período de crisis,

ya había otros esfuerzos diplomáticos comprometidos que transmitían concepciones particulares de los problemas regionales. El primero de ellos tuvo origen latinoamericano. Desde 1983, México, Venezuela, Colombia y Panamá habían decidido emprender un esfuerzo de mediación destinado a devolver la paz al istmo centroamericano. Los trabajos de este grupo —llamado Grupo de Contadora— recibieron rápidamente un amplio apoyo internacional (resolución 38/10 de la ONU y 675 de la OEA en 1983, apoyo de la CEE, en la reunión de San José de 1984), y se beneficiaron a partir de 1985 con la colaboración de Argentina, Perú, Brasil y Uruguay (grupo de apoyo). Se llegó a la redacción de un Acta de Contadora para la paz y la cooperación en América Central, cuya versión definitiva fue entregada a los centroamericanos en septiembre de 1985. El plazo para la firma corría hasta junio de 1986, pero el documento no fue firmado por Nicaragua.

El Grupo de Contadora tenía una visión muy internacionalista de la crisis centroamericana. En su opinión, las dificultades que conocía esta región podían reconducirse a una serie de conflictos entre los países. Su primer objetivo era, por tanto, impedir el estallido de una guerra generalizada a todo el istmo. Puede encontrarse esta concepción en la enumeración de los principios que presidieron las negociaciones, y que figuran al frente del Acta. Estos se resumen en un estricto respeto a los grandes principios del derecho internacional, tales como la renuncia al uso de la fuerza, la no injerencia, la cooperación, etc. También puede encontrarse dicha concepción en la serie de compromisos que los países centroamericanos hubieran debido respetar. El primero de ellos debía ser la promoción de la confianza mutua, a fin de evitar toda acción que pudiera provocar una ruptura de la paz. También se menciona el compromiso en materia de reconciliaciones nacionales y de organización de elecciones; sólo que al redactarse sin exposición de motivos, quedaron ahogados entre la masa de compromisos a respetar en materia de seguridad (maniobras militares, armamentos, presencia militar extranjera, tráfico de armas, etc.), que constituyen la parte más importante del Acta.

Por razones que sería demasiado largo exponer aquí, referentes a las estrategias diplomáticas de los países implicados en sus trabajos y en las negociaciones que tuvieron lugar, el Grupo de Contadora no efectuó en ningún momento un examen de los orígenes internos de las crisis. En su activo figura el hecho de haberse convertido en un instrumento de mediación bastante eficaz, ya que los conflictos jamás degeneraron en guerra. Sin embargo, el análisis subyacente a los trabajos no podía ser válido para las clases dirigentes de América Central. Lo era en cambio para la Nicaragua sandinista, que veía en este análisis una fuente de reconocimiento internacional.

La segunda iniciativa diplomática, la de Estados Unidos, tenía un carácter mucho más seductor para la América Central opuesta al sandinismo. El análisis



de la administración Reagan encontraba su inspiración en la aversión del presidente a toda forma de comunismo y en los trabajos de la Comisión Nacional bipartita sobre América Central (o comisión Kissinger), convocada en 1983 para estudiar las amenazas que pesaban sobre los intereses norteamericanos en la región. Las conclusiones de la comisión sugerían que el origen de la crisis debía de buscarse en la pobreza, la injusticia y en unos regímenes políticos poco inclinados a las reformas. Pero la administración Reagan retuvo sólo la idea de que las causas de la desestabilización de las democracias estaban en la explotación de una situación volátil producida por fuerzas hostiles a los valores occidentales y que recibían el apoyo cubano y soviético.

La terapia propuesta consistía claramente en tratar de eliminar a los sandinistas. Sería sin duda un error reducir la política de Reagan a un simple apoyo a la *contra*. El plan de paz propuesto en abril de 1985 constituyó el asunto político pendiente. Se trataba de una propuesta de paz para América Central que concernía sólo a Nicaragua, lo que indica claramente que este país, según el análisis norteamericano, era el origen de todos los problemas del istmo. La propuesta consistía en aplicar a Nicaragua la fórmula que supuestamente se había probado en El Salvador, es decir, una combinación de democracia, autodefensa, desarrollo económico y diálogo. Pero dejemos a un lado el carácter casi surrealista del ejemplo salvadoreño, y quedémonos, en cambio, con la propuesta de una reconciliación nacional y de elecciones en Nicaragua. “La democracia es el camino de la paz. Pero si abandonamos a los valientes miembros de la resistencia democrática, despejaremos también todos los obstáculos a los comunistas”\*, había declarado Reagan el 4 de abril de 1985, recalcando la complementariedad de las dos caras de su diplomacia.

La primera de estas dos ideas –la democratización– fue retomada por los centroamericanos, pero no la segunda –la agresión militar–. En otros términos, la diplomacia centroamericana realizó a partir de 1986 una síntesis entre los trabajos del Grupo de Contadora y las propuestas de paz de Ronald Reagan. Del primero retomó la convicción de que una desmilitarización del istmo era indispensable para la búsqueda de la paz, pero se unía a las preocupaciones del segundo en lo concerniente a la democracia. No insistiremos aquí sobre las consecuencias del todo excepcionales que permitieron a esta diplomacia desarrollarse con el éxito que sabemos.

En lo concerniente al trabajo de reobjetivación efectuado en las cumbres de los presidentes centroamericanos, convendría distinguir algunos períodos.

### CUMBRES CENTROAMERICANAS

Nro.	FECHAS	LUGAR	CARACTERÍSTICAS	
1	24-25 mayo 86	Esquipulas (1) (G)	Cumbre introductoria	CUMBRES DE CRISIS
2	6-7 agosto 87	Esquipulas (2) (G)	Cumbre del plan Arias	
3	15-16 enero 88	Alajuela (CR)	Cumbre del primer balance	
4	13-14 febrero 89	Costa del Sol (El S)	Cumbre de elecciones en Nicaragua	
5	5-7 agosto 89	Tela (Honduras)	Cumbre de elecciones en Nicaragua	
6	10-12 diciembre 89	San Isidro de Coronado (CR)	Cumbre de urgencia (ofensiva del FMLN)	
7	2-3 abril 90	Montelimar (N)	Cumbres de organización	CUMBRES DE POST-CRISIS
8	15-17 junio 90	Antigua (G)	de integración	
9	15-17 diciembre 90	Puntarenas (CR)	económica	
10	15-17 julio 91	San Salvador (El S)	Cumbres de	CUMBRES DE POST-CRISIS
11	12-13 diciembre 91	Tegucigalpa (H)	organización	
12	4-5 junio 92	Managua (N)	de integración	
13*	diciembre 92	Guatemala (G)	económica y política	

\* Según lo previsto

Las seis primeras cumbres hicieron referencia a las crisis. Se elaboró un estudio y, a partir de ahí, se imaginaron salidas. El trabajo de reobjetivación tomó su origen. Las cinco últimas son cumbres posteriores a la crisis, a las cuales haremos referencia más adelante.

Las seis cumbres celebradas entre mayo de 1986 y diciembre de 1989 no tuvieron los mismos objetivos. La primera, convocada por el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo, manifestó la voluntad de su país de salir del aislamiento al que los militares lo habían confinado. No cabe, pues, asombro alguno acerca de si llevaba las huellas de Guatemala, y ello al menos desde dos puntos de vista. Su apoyo al proceso de Contadora, en primer lugar, fue incondicional. Se lee en la declaración final que “la mejor instancia política de la cual dispone América Latina en estos tiempos para alcanzar la paz y la democracia, y para reducir las tensiones que aparecieron en los países, es el proceso de Contadora”. Más lejos, los cinco presidentes se comprometieron a firmar el Acta de Contadora por la paz y la cooperación. Hubo, en segundo lugar, un resabio de integracionismo, evidenciado en la propuesta del parlamento centroamericano de “consolidar el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo, como elementos fundamentales para la paz en la zona y para la integración de América Central”. Estas dos

posiciones singularizan a Guatemala, más próxima a la diplomacia mexicana, y desde siempre candidata a la hegemonía regional en el marco de una unión política, de la que la historia le reservó a veces la presidencia.

A esta concepción guatemalteca de la crisis y de sus soluciones, inspirada por Contadora y la postura integracionista, se opuso rápidamente Costa Rica. El día de su toma de posesión, el 8 de mayo de 1986, el nuevo presidente costarricense, Oscar Arias, envió al Grupo de Contadora un documento, titulado “Por la democracia en América Central”, en el que indicaba su intención cierta de firmar el Acta, pero insistiendo aún más en la necesidad de democratizar todos los países del istmo. El objetivo de la segunda cumbre, celebrada en Esquipulas, fue precisamente el de examinar el plan Arias, que preveía un proceso en once puntos, de inspiración sensiblemente distinta de la de Contadora. No se trataba ya de prevenir o arbitrar conflictos entre los países, sino de ir a las raíces internas de los conflictos en cada uno de los ellos. El análisis subyacente consistía en considerar que las sociedades centroamericanas adolecían de un déficit de democracia que llevaba a algunos sectores marginados a buscar canales de expresión en la lucha armada. Así, todas las fuerzas sociales fueron invitadas a reanudar el diálogo en los países desgarrados por guerras civiles.

Es preciso señalar que el plan Arias no establecía diferencia alguna entre los países. En ninguna parte se hace mención de disposiciones particulares aplicables a un determinado país. Es decir que ofrecía una explicación única para todas las crisis que afectaban a la región. La debilidad de Contadora consistió en haber pasado por alto las causas de las crisis, y en no ofrecer más que un simple instrumento para el mantenimiento de la paz. La fuerza del nuevo plan consistió en simplificar en exceso tales causas, resituando a América Central en la *mainstream* del nuevo tiempo mundial de la democracia mercantil. Su éxito internacional –premio Nobel de la Paz para su autor en 1987– volvió además particularmente convincente su visión de la crisis, e inaplazables las soluciones que proponía.

No obstante, esta primera lectura del plan de paz no debe inducir a error. La uniformidad de trato puesta de manifiesto disimulaba una más precisa concepción de los orígenes de la crisis, así como de la solución que convenía adoptar. En primer lugar, la exigencia de democratización de todo el istmo se dirigía prioritariamente a la Nicaragua sandinista, en la medida en que, en 1986, el resto de los países de Centroamérica habían realizado “exitosamente” su transición hacia la democracia mediante la organización de elecciones limpias, en tanto los sandinistas habían vencido en 1984 en elecciones calificadas de fraudulentas por la administración Reagan y los sectores conservadores centroamericanos.

Así pues, ya no se trataba de deplorar el déficit democrático de las sociedades centroamericanas, sino de entablar un proceso a los sandinistas. Era el

incumplimiento de las promesas de democratización realizadas por los sandinistas lo que estaba en causa. Un desafío se había lanzado por tanto a los sandinistas, apostando a que serían incapaces de ganar unas elecciones “limpias”. En prueba, el plan preveía que “sería conveniente organizar en cada país, en presencia de observadores internacionales [...], en los plazos previstos, y de conformidad con los calendarios a determinar de acuerdo con las constituciones respectivas en vigor, elecciones igualmente libres y democráticas tendientes a elegir a los representantes populares en los consejos municipales, los congresos y asambleas legislativas, y a la presidencia de la República”.

Evidentemente, tal párrafo sólo podía estar destinado a Nicaragua. En los demás países, las constituciones y las leyes electorales fijaban el calendario de las elecciones. En 1986, Guatemala salía de una elección presidencial y se apresataba, en 1988, a organizar elecciones municipales. Honduras iba ya por las terceras elecciones desde la transición de 1980, y El Salvador organizaba, desde 1982, elecciones legislativas cada tres años, y presidenciales cada cuatro. Si bien la constitución nicaragüense, promulgada el 9 de enero de 1987, preveía en su artículo 148 un mandato presidencial de seis años (lo que significaba elecciones en 1990), Arias y sus colegas, con el apoyo de Estados Unidos, querían obligar a Nicaragua a modificar dicho vencimiento.

La invitación a la reconciliación nacional, previa a la organización de elecciones en todas las sociedades escindidas, equivalía a igualar a las guerrillas guatemalteca y –sobre todo– salvadoreña con la *contra* nicaragüense. La representatividad de las dos primeras, atestada –en lo concerniente al FMLN-FDR– por la declaración franco-mexicana de agosto de 1981, poco tenía que ver con el carácter artificial de la segunda. Hacer como si la interrupción de la asistencia a las guerrillas y a la *contra* debiese facilitar la reconciliación, equivalía a diluir las deficiencias de los regímenes salvadoreño y guatemalteco, que habían dado lugar a luchas armadas. Eso implicaba eliminar los determinantes internos de las crisis, en beneficio de sus causas externas. Ahora bien, como se ha visto, éstas valían esencialmente para Nicaragua. Tal asimilación de las guerrillas guatemalteca y salvadoreña a la *contra* dividió a los centroamericanos. El plan de paz, por otro lado, tomó la precaución de establecer una débil distinción entre “fuerzas irregulares”, “movimientos insurreccionales” y “grupos rebeldes”, designando, al parecer, con las primeras a la *contra*, y con las otras dos a las guerrillas. Con todo, preveía procedimientos comunes de reintegración a la vida política.

En definitiva: la solución a la crisis residía en el abandono del poder por parte de los sandinistas. El plan de paz de Arias, que sirvió de hilo conductor en todas las costumbres a partir de 1987, contenía en filigrana un verdadero plan de guerra contra la Nicaragua sandinista. Pero las anodinas apariencias y la insisten-

cia puesta en la democracia lo hicieron atractivo, incluso para los sandinistas, confiados en su apoyo popular. De este modo, el plan de paz se sumaba a los objetivos de la administración Reagan, pero con métodos infinitamente más sutiles que, por lo demás, suscitaban fricciones en la medida en que su aplicación suponía el cese de la ayuda militar de Estados Unidos a la *contra*.

No entraremos en el detalle de las declaraciones producidas al hilo de las cumbres siguientes. La tercera hizo un primer balance, negativo, de la aplicación de las disposiciones previstas en la declaración de Esquipulas II. Ha de notarse que la declaración de Alajuela afirmó, por vez primera, que “las causas primeras del conflicto son económicas y sociales, por lo que es imposible alcanzar la paz sin desarrollo”. Este tema aparece de manera recurrente en las demás cumbres, y llegó a convertirse en dominante luego de la salida de los sandinistas (cumbre séptima y siguientes).

Las cumbres cuarta y quinta estuvieron consagradas casi por entero a las elecciones nicaragüenses. El presidente Ortega, en medio de grandes dificultades económicas, llegó a la cumbre de Costa del Sol con una propuesta tendiente a adelantar las elecciones nueve meses, y sus colegas centroamericanos se convirtieron entonces en organizadores y escrutadores del proceso electoral. He ahí otra prueba más de que la celebración de elecciones en Nicaragua era considerada como la solución a la crisis regional.

La sexta cumbre, urgentemente convocada con el fin de condenar la ofensiva del FMLN el 11 de noviembre de 1989, consagró la equivalencia de trato entre la guerrilla salvadoreña y la *contra*. En la declaración de San Isidro de Coronado se precisó de manera explícita que “la puesta en marcha del proceso de desmovilización de la Resistencia nicaragüense y del FMLN constituyen un factor fundamental para la resolución de la crisis”. A fin de cuentas, no cabía la menor duda en el espíritu de los inspiradores del plan Arias de que la salida de los sandinistas del poder asfixiaría al FMLN, y ése continuaba siendo el objetivo prioritario.

Tal cumbre fue la última del período de crisis. El 25 de febrero de 1990, los sandinistas perdían las elecciones presidenciales y se “retiraban”<sup>35</sup> del poder, sancionando el éxito del plan elaborado por Arias en 1986. La cumbre de Montelimar fue entonces la de las felicitaciones y los cambios de orientación. La declaración preveía que “la consolidación de la democracia, una vez superados los obstáculos a la paz, exige que se afronte con determinación el desafío económico”.

---

35. Las comillas se imponen aquí debido a que, en muchos aspectos, el poder sandinista ha permanecido intacto, como atestiguan su control del ejército, la policía y la justicia, y el apoyo que los diputados sandinistas brindan a una presidenta, Violeta Chamorro, desbordada por su derecha y enfrentada a la agitación social.

Un rápido balance permite poner de relieve el modo en que estas cumbres llegaron a imponer una lectura de la crisis. Hemos mencionado, además, la influencia del Grupo de Contadora y de Estados Unidos en dicho proceso. Pero el análisis quedaría incompleto si omitiéramos añadir otro actor. Por encima y por debajo de esa labor de reobjetivación llevada a cabo por los presidentes, ciertos sectores sociales no permanecieron inactivos. La patronal y los media centroamericanos jugaron por cierto un papel determinante, orquestando violentas campañas antisandinistas y ejerciendo presión sobre los negociadores. Si hemos considerado las declaraciones emitidas durante las cumbres como indicadores de un trabajo de reobjetivación, sería erróneo retener la impresión de un ejercicio diplomático aislado de todo sustrato social. Sería más justo sostener que las posiciones defendidas por los presidentes fueron el reflejo de un estado de la opinión pública en la región. Ahora bien, éste fue fuertemente influido durante los años '80 por las tomas de posición de los sectores empresariales. Su discurso se impuso con gran fuerza a causa de su activo papel en el proceso de transición hacia la democracia, y de que predicaban un modelo de desarrollo económico neoliberal, en boga en el plano internacional. Recompensados una primera vez por la deriva conservadora de las democracias centroamericanas durante la crisis, lo fueron en una segunda ocasión después de la crisis, cuando pusieron en obra su proyecto de "integración privada".

### **Conclusión: la generalización de un tipo degradado de democracia en la región**

Luego de haber hallado una salida política a una crisis regional cuyas causas no eran políticas, América Central se encuentra con una serie de problemas sin resolver. Las raíces estructurales de las crisis —más aún durante los años '80— se han agravado, en la medida en que la crisis económica ha profundizado las desigualdades y empobrecido a los países. Y otras nuevas dificultades se han venido añadiendo. América Central ya no representa una apuesta en las relaciones internacionales, por lo que la ayuda económica, sobre todo norteamericana, ha disminuido de manera considerable. Ciertamente, desde comienzos de los años '80, la paz y la democracia han hecho progresos considerables en América Central, después de que la guerra provocara la muerte de unas 250.000 personas en aquellos años. La reconciliación va por buen camino y las citas electorales marcan las cadencias de la vida política. Sin embargo, la desmilitarización no ha sido completa, y graves problemas sociales permanecen: la delincuencia y la inseguridad sólo son al respecto su manifestación más espectacular.

En El Salvador se llegó a un acuerdo de paz el 16 de enero de 1992, gracias a la eficaz mediación de la ONU. En Guatemala, las negociaciones se demostraron más complejas, pero con la firma de un "Acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas", el 31 de marzo de 1995, se dio un paso de importancia. Por otra parte, el nuevo presidente, Alvaro Arzu, parece decidido a concluir rápidamente un acuerdo de paz. En Nicaragua y en El Salvador, la aplicación de los acuerdos de paz no ha estado exenta de dificultades. En ambos casos, el proceso de pacificación pasaba por una desmovilización de los combatientes y su reintegración a la vida civil. Así, los 12.000 rebeldes de la contrarrevolución nicaragüense (la *contra*), y los 8.000 combatientes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) salvadoreño han entregado sus armas. Por su parte, los ejércitos han reducido efectivos, disuelto sus aparatos represivos, y aceptado someterse a un mayor control de las autoridades civiles. Esa masiva desmovilización ha planteado numerosos problemas. Los acuerdos de paz preveían especialmente la concesión de lotes de tierras o de indemnizaciones para los excombatientes, que no han podido llevarse a cabo por falta de voluntad política tanto como de márgenes de maniobra económica.

En Nicaragua, los antiguos combatientes de la *contra* (los *recontras*) han vuelto a tomar las armas en varias ocasiones para exigir el respeto de los acuerdos de paz, y han provocado así la movilización de los antiguos militares sandinistas (*recompas*). El país estuvo a punto de recaer en la guerra civil cuando, el 20 de julio de 1993, un Frente Revolucionario de Campesinos y Obreros (FROC), compuesto por *recontras* y *recompas*, tomó la ciudad de Esteli, de 150.000 habitantes.

En El Salvador, los "Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador" (ONUSAL) encontraron un buen número de dificultades para hacer respetar el calendario de los acuerdos de paz. Los plazos para la desmovilización de los guerrilleros fueron demorados en varias ocasiones, pues al mismo tiempo el ejército se mostraba reacio a suprimir sus órganos de represión. Con todo, en enero de 1995 la policía nacional (PN), acusada a menudo de violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil, fue disuelta. No obstante, más de tres años después de la firma de los acuerdos de paz, sólo un 40 % de las solicitudes de concesión de tierras se habían visto satisfechas. Esto implicaba que miles de excombatientes de origen campesino quedaban sin recursos, lo que no impidió al presidente salvadoreño, Armando Calderón Sol, declarar el 31 de octubre de 1995 que el gobierno había respetado sus compromisos y que el proceso de paz había concluido.

En Guatemala, los militares jamás fueron convencidos de la necesidad de negociar con una guerrilla incapaz de infringirles golpes de consideración. La mediación de la ONU permitió desbloquear las negociaciones en enero de 1994. El dossier más espinoso sigue siendo el de los derechos humanos. Una Comisión

de la Verdad fue establecida en junio de 1994, y una Misión de las Naciones Unidas de verificación de los derechos humanos en Guatemala (MINUGUA) se puso en marcha en noviembre de ese mismo año, pero aún queda mucho por hacer para que Guatemala deje de ser el país de América Latina menos respetuoso de los derechos humanos.

El cese de hostilidades en ningún país ha significado en verdad la completa pacificación de la sociedad. A los enfrentamientos entre ejércitos y guerrillas ha sucedido una espectacular elevación de la criminalidad, de la delincuencia al tráfico de drogas. Su causa primera es la degradación de las condiciones de vida de los centroamericanos, pues la tendencia de los programas de ajuste preconizados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es la de ahondar las divisiones sociales. Pero la elevación de la delincuencia tiene otra causa en la imperfecta reinserción de los antiguos combatientes. Mientras los antiguos dirigentes guerrilleros han podido reintegrarse a la vida política, como el FMLN salvadoreño (actualmente segunda fuerza política en el país) y su dirigente Ana Guadalupe Martínez (actual vicepresidente de la Asamblea), el grueso de los batallones ha sido dejado de lado en los planes de paz. Muchos de sus miembros conservaron sus armas, cuando no las vendieron antes de ser desmovilizados: se estima en 300.000 el número de armas que circulan en El Salvador.

Esa inseguridad galopante tiene la consecuencia de frenar la desmilitarización de las sociedades, o mejor, de revertir la tendencia. Así, en Guatemala, batallones del ejército prestan su asistencia a la policía nacional en el cuadro de "Comandos anti-secuestro", sin situarse en cambio bajo la autoridad civil. Del mismo modo, en El Salvador 5.000 militares colaboran con la recientemente creada policía nacional civil para aplicar un "plan guardián" contra la delincuencia. Incluso, se reforman los "escuadrones de la muerte", encargados de realizar una justicia expeditiva.

Costa Rica, por último, se ha convertido en un país centroamericano como los otros. También ella se enfrenta a un alza espectacular de la violencia y de la delincuencia que la constriñe a endurecer su democracia. Así, en febrero de 1996, la Asamblea Legislativa votó una "Ley de justicia penal juvenil" que prevé penas de prisión de hasta 15 años para menores, caso único en América Latina.

Puesto que ha implicado una dinámica de colaboración intergubernamental en la región, el proceso de paz ha desembocado en un relanzamiento de la integración económica y política, susceptible de producir frutos en un futuro. Pero, por el momento, los centroamericanos continúan esperando poder gozar plenamente de la vuelta de la paz a la región, y juzgan de manera muy severa –como lo indican numerosos sondeos– su "reencontrada" democracia.



---

## Referencias bibliográficas

- AUSTIN (1970) *Quand dire c'est faire*. París, Seuil.
- BODENHEIMER (1970) "The Social Democratic Ideology In Latin America: The Case Of Costa Rica's Partido de Liberación Nacional", en *Caribbean Studies*, 10 (3).
- BOURDIEU (1982) *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*. París, Fayard.
- BULMER-THOMAS, V. (1987) *The Political Economy of Central America Since 1920*. Cambridge, Cambridge University Press.
- BULMER-THOMAS (1992) "The Economic Causes of the Central America Crisis", trabajo presentado en el coloquio "Análisis de una crisis: la América Central de los años '80, CERI, París, 11-12 junio de 1992.
- CAMACHO, D. y MENJIVAR, R., coords. (1985) *Movimientos populares en Centroamérica*. San José, EDUCA-FLACSO-UNU-IISUNAM.
- FITZGIBBON, R. H. (1968) "Measuring Social And Political Requirements For System Stability In Latin America", en *The American Political Science Review*, 62 (4).
- FURET, F. (1978) *Penser la Révolution Française*. París, Gallimard.
- JOHNSON, K. F. (1976) "Scholarly Images Of Latin American Political Democracy In 1975", en *Latin American Research Review*, 11 (2).
- KAUFMAN, M. (1985) *Jamaica Under Manley, Dilemmas Of Socialism And Democracy*. Londres, Zed Books.
- LOWENTHAL, A., comp. (1991) *Exporting Democracy. The United States and Latin America*. Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press.
- LYOTARD (1979) *La condition post-moderne*. París, Editions de Minuit.
- MERTON (1965) *Eléments de théorie et de méthode sociologique*. París, Plon.
- MOSCA, G. (1939) *The Ruling Class*. New York y Londres, Mc Graw-Hill Company.
- ROUQUIE, A. (1982) *L'Etat militaire en Amérique latine*. París, Seuil.
- STONE (1982) *La dinastía de los conquistadores. La crisis del poder en la Costa Rica contemporánea*. San José, Educa.
- TOULABOR, C. (1981) "Jeu de mots, jeu de vilain. Lexique de la dérision politique au Togo", en *Politique africaine*, 1 (3).
- VEGA CARBALLO, J. L. (1982) *Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: ensayo sociológico*. San José, Porvenir.